

ÁNGEL VIÑAS

EL GRAN
ERROR
DE LA
REPÚBLICA

Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno

El gran error de la República

Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno



Primera edición: marzo de 2021

El gran error de la República. Entre el ruido de sables y la ineficacia del Gobierno Ángel Viñas

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47.

© Ángel Viñas, 2021

© Editorial Planeta, S. A., 2021 Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España) Crítica es un sello editorial de Editorial Planeta, S. A.

editorial@ed-critica.es www.ed-critica.es

ISBN: 978-84-9199-276-9 Depósito legal: B. 1.661-2021

2021. Impreso y encuadernado en España por Liberdúplex

El papel utilizado para la impresión de este libro está calificado como papel ecológico y procede de bosques gestionados de manera sostenible.

La República crea dos dispositivos de vigilancia

Two roads diverged in a yellow wood, And sorry I could not travel both¹

Tras el fallecimiento del general Franco a finales de 1975, hubo en España una explosión de libertad de expresión, para contener la cual ya no existían las argollas de la censura. No era la acuñada en la guerra, que dominó, aherrojó y distorsionó hasta límites insospechables hoy la capacidad de expresión de la sociedad española. Sin embargo, su sucesora, la Ley Fraga, algo más suave, había continuado condicionando las posibilidades de indagar un pasado oscuro y repleto de mitos.

La explosión mencionada se produjo en los más diversos ámbitos de la vida colectiva. Uno de ellos fue la aparición de un nuevo tipo de cine. Entre las películas que entonces se proyectaron en las pantallas españolas es, para este libro, muy significativo el documental coordinado por un entonces joven director no demasiado conocido. Se llamaba Jaime Camino, y a su esfuerzo, que hoy puede verse en cualquier ordenador, le puso un título evocador: *La vieja memoria*.²

La «vieja memoria»

La vieja memoria, de una duración de 2 horas y 40 minutos, ha recibido el honor de una pequeña entrada en Wikipedia. Es muy escueta: se trata de un análisis de los años republicanos y de la guerra civil realizado por

- «Dos caminos se bifurcaban en un bosque otoñal, y apenado por no poder los dos transitar.» The Road not Taken, de Robert Frost. Traducción de José Manuel de Prada.
 - 2. https://www.documaniatv.com/historia/la-vieja-memoria-video_fb95f9b9b.html

medio de imágenes de archivo y declaraciones de una amplia selección de personajes que vivieron aquellos tiempos. La realización se hizo a lo largo de 1977. Se estrenó en marzo de 1979. Tuvo un estilo muy propio. El director prácticamente desapareció del documental, salvo en escasos momentos en que introdujo comentarios en *off*, y dejó que los protagonistas desglosaran sus recuerdos. El montaje final mezcló aspectos y opiniones contradictorios. No hay mucho que objetar a este análisis.

Sí cabría añadir que algunos de tales recuerdos no eran nuevos y ya habían aparecido de una forma u otra en los años finales de la dictadura. Tales fueron los casos, por ejemplo, de varios falangistas (Raimundo Fernández Cuesta, David Jato), políticos conservadores (José María Gil Robles) y escritores monárquicos (José Luis de Vilallonga). Todos ellos se vieron contradichos por las intervenciones de otro tipo de protagonistas de los años de guerra y de preguerra. En términos numéricos dominaron los anarcosindicalistas (Diego Abad de Santillán, Eduardo de Guzmán, Federica Montseny, Ricardo Sanz) y los poumistas (Julián Gorkin y compañeros de base). Enfrente estuvieron los comunistas (Rafael Alberti, Dolores Ibárruri, Enrique Líster, Rafael Vidiella), de ERC (Josep Tarradellas, Jaume Miravitlles), un militar catalán (Federico Escofet) v otros. No aparecieron socialistas o republicanos de izquierdas, salvo en casos marginales. La partitura musical, debida al conocido compositor Xavier Montsalvatge, mezcló himnos, canciones revolucionarias y aires populares. Fue, me atrevo a señalar, muy brillante.

Los aspectos bélicos del conflicto pasaron a un segundo término. Dominaron los políticos e ideológicos. Se centraron en la sempiterna pugna entre comunistas y anarcosindicalistas/poumistas. Abordaron la vieja discusión entre la opción de dar preferencia a la guerra o de profundizar en la revolución. El choque dialéctico había alimentado las discordias de los exiliados en la guerra y en el exterior durante los largos años del franquismo. Volvieron a la escena con toda intensidad, aunque el documental no incluyó referencias a las fechas en las que se habían filmado las declaraciones.

Los protagonistas de antaño parecían no haber leído gran parte de la historiografía que ya se había publicado, ante todo en el extranjero, sobre el conflicto. En este sentido, el título fue un tanto engañoso y hubiera debido precisar que era el de la *vieja memoria* de comunistas, anarquistas y poumistas. Las efectuadas por falangistas y José María Gil Robles fueron tan reiterativas como había sido habitual en los años franquistas, con el exlíder de la CEDA, eso sí, evacuando toda responsabilidad propia en la dinámica que condujo a la guerra y que puso sobre los anchos hombros de las derrotadas izquierdas.

Ahora bien, en puridad, hoy sería preciso hablar de tres memorias: la primera, la de los vencidos, que durante muchos años tuvo solo efectos melancólicos, pero paralizantes, para una acción conjunta contra la dictadura; la segunda, cuya obsesiva predominancia terminó extinguiéndose con los últimos vestigios represivos del régimen (policía, TOP, censura, cárceles y represión), y una tercera, en la que se situó como avanzadilla el ya anciano Gil Robles, que ha logrado sobrevivir, incluso con pretensiones hegemónicas, pues ha sido, y es, funcional para facilitar la inserción de la mayor parte de la derecha en el régimen democrático sin que por ello se hubiera visto obligada a condenar sus propios orígenes.

Si este libro se inicia con el recuerdo de una película que probablemente impactó a muchos espectadores (desde luego a quien esto escribe) es porque en él varios de los participantes evocaron un aspecto concreto. La cuestión no menos sempiterna en la literatura y en numerosos recuerdos fue la incapacidad o la falta de decisión de los gobernantes en la primavera de 1936 por cortar («decapitar» fue el término utilizado por Líster) la conspiración militar en marcha. Escofet, por ejemplo, la había puesto sobre el tapete en sus conocidas memorias. Ninguno dijo mucho de las actuaciones de la trama civil. A lo sumo se hizo una sucinta referencia al acuerdo entre monárquicos, militares y carlistas con los italianos de marzo de 1934 o a los dineros fascistas que recibió José Antonio Primo de Rivera. El vector exterior solo apareció en las referencias posteriores al 18 de julio, ya que la injerencia de las potencias del Eje en el conflicto español era insoslayable.

Quienes todavía no habían digerido la inacción gubernamental, en el sentido apuntado, durante la primavera de 1936 fueron esencialmente Ibárruri y Líster. La primera, por su referencia al trabajo que el PCE había desarrollado en aquel tiempo en los cuarteles (minutos 21 y 34), sabía que existía mucha agitación entre los militares. Como veremos en este libro, su afirmación respondía rigurosamente a la verdad de los hechos. El segundo, porque en aquel contexto fue el responsable del «aparato A-M» (antimilitarista) del partido, encargado, a través de sus militantes llamados a filas, de hacer trabajo informativo y político en los cuarteles.

En las páginas de este libro se documenta una tesis parecida, pero mucho más completa y compleja. De la misma forma que los gobiernos republicanos, en particular los de izquierdas, subestimaron la influencia de la trama civil apoyada por el fascismo italiano, también menospreciaron el alcance y la significación de las actividades extremistas de las derechas en el seno del Ejército. Con todo, tuvieron informaciones fiables de que la UME estuvo conectada con los dirigentes monárquicos. No sirvió de nada porque pensaban en otra cosa.

Si bien la documentación que he hallado de los servicios de inteligencia en el período republicano hasta julio de 1936 es muy fragmentaria, y teniendo en cuenta que toda EPRE encontrable será algún día encontrada, este libro tratará de argumentar empíricamente en qué pensaba el gobierno Casares Quiroga ya antes del golpe.

Tiempos convulsos de rodaje del nuevo régimen

El recorrido de la República española en lo que cabríamos caracterizar como su período de paz ha sido objeto de numerosas investigaciones crecientemente sofisticadas en cuanto a metodología y ambiciones. Pocos son los ámbitos que han escapado a la atención de los historiadores. Aquellos cinco años y pocos meses han generado tal densidad de publicaciones que pueden considerarse como el período mejor y más exhaustivamente estudiado de la historia contemporánea de España. Sin embargo, y por extraño que parezca, siguen subsistiendo mitos e interpretaciones en los que el conocimiento de los hechos y las explicaciones fundamentadas de lo que hubo detrás de los hechos no han hecho demasiada mella.

Esto es una consecuencia de las leyendas e interpretaciones generadas, difundidas y mantenidas a cal y canto, contra viento y marea, por una historiografía que sigue teniendo como fuentes el relato creado por los debeladores de la República. O que ha absorbido el generado en los largos años de la dictadura que fue conformándose durante la guerra civil y que subsistió hasta la muerte del general Francisco Franco. Uno de los últimos adalides en hacerlo es el profesor Stanley G. Payne, a la cabeza de una pequeña cohorte de historiadores de derechas, que han introducido correcciones más semánticas que de fondo a sus escritos.

Lo que hay detrás se enuncia brevemente. En el marco de la pugna económica, ideológica y política que recorrió los años de la guerra fría, se proyectó y defendió una imagen muy precisa con todos los recursos intelectuales de la dictadura y de sus aliados occidentales. Franco apareció como el «centinela de Occidente», como el primer soldado de Europa que derrotó al comunismo en el campo de batalla. Así lo vieron sus seguidores y, lo que es más importante, sus protectores (aun cuando algunos rebajaron su trascendencia). Por el contrario, la República apareció como la antesala de una guerra civil inevitable que impidió, a Dios gracias, que España quedase prendida en las garras del comunismo.

Nada de ello es cierto. Lo que sí es cierto es que en 1931 la República se propuso hacer avanzar a la sociedad española hasta el siglo xx. Para

ello era preciso derrumbar los mecanismos económicos, políticos y sociales que la habían mantenido en un estadio de subdesarrollo incompatible con el conseguido por las democracias europeas occidentales con las que tradicionalmente se medía: Francia, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, Bélgica, entre otras.

Esta labor se abordó con la conciencia de que el tiempo transcurría demasiado lentamente, de que los retos eran múltiples y de que, eliminado uno de los soportes de la sociedad de la Restauración como era el sistema monárquico, era imprescindible abordar los otros dos: la dominación ideológica de la Iglesia y, sobre todo, el dogal que habían representado las fuerzas armadas que no eran tanto nacionales como de la Corona. ¿La aspiración? Ni más ni menos que llegar a ser un país moderno. Tenía sus propias raíces en las controversias, a veces por las armas, del siglo XIX y se había regado a consecuencia del «desastre» del 98, topando con una Corona intervencionista, un sistema político anquilosado y unas fuerzas armadas ahogadas en la interminable guerra de Marruecos, pero también orientadas hacia combatir el «enemigo interior» que muchos conservadores, incluso antes de su fascistización, consideraban como el adversario más peligroso y por antonomasia de España.

El esfuerzo modernizador o de homologación con el entorno tropezó con innumerables obstáculos, internos y externos. Han sido estudiados pormenorizadamente. Dos lo han sido menos, aunque fueron determinantes para el futuro del nuevo régimen en conexión con los sectores añorantes de la Monarquía y preocupados por mantener sus posiciones de poder económico, político y cultural. El primero fueron las conexiones exteriores de la minoría monárquica. El segundo la atención que recibieron en la Italia fascista, que aspiraba a desarrollar un sistema político que sobrepasara, teóricamente, el capitalismo y el comunismo en el marco de un nacionalismo exacerbado y excluyente, basado en la violencia interna y externa y con pretensiones imperialistas.

Las ambiciones de los nuevos dirigentes no escaparon a los observadores extranjeros. Los aireó, en efecto, la publicística española y foránea. También sus contradicciones. Como la historia se escribe conociendo el pasado (si no, no es historia) y hoy conocemos lo que ocurrió en 1936, es conveniente apoyarse en testimonios de época. Testimonios que tenían la finalidad de explicar a Gobiernos extranjeros lo que realmente estaba en juego o lo que ocurría en España. Los análisis de observadores como el embajador británico sir George Grahame, llegado a Madrid en 1927, o del francés, Jean Herbette, que lo hizo en 1931, se han repercutido en la investigación, aunque aisladamente. Aquí lo haremos de forma conjunta

y en paralelo. Los lectores saben que sus países de origen, el Reino Unido y Francia, desempeñaron un papel fundamental a la hora de introducir una política de no intervención tras el semiexitoso y semifracasado golpe militar de 1936. Dicha política contribuyó a sellar el destino de la República, como bien advirtió poco tiempo después su presidente, Manuel Azaña.

En su primer informe anual sobre lo acaecido en España en 1931, Grahame llamó la atención de que era la tercera vez desde los comienzos del siglo XIX que la casa de Borbón había perdido la Corona.³ Lo que había ocurrido era, dicho con sencillez, que una poderosa fuerza pletórica de dinamismo impactó sobre una situación irremediablemente estática. El trono, apoyado por una Iglesia poderosa, por una aristocracia a él entregada y por una multiplicidad de intereses creados en la economía y la agricultura, pero no basado en la estima de la mayor parte de la población, se había desplomado sin que nadie disparara un tiro en su defensa. El pueblo carecía de canales para hacer oír su voz y hacer sentir sus necesidades. La dictadura, la Iglesia y el Ejército los habían ahogado. El cambio de régimen lo había posibilitado la alineación de la burguesía con las clases populares al dar la espalda a un régimen corrupto con el fin de restablecer un ordenamiento constitucional en España, que el exrey había quebrado. En el proceso de cambio, una de las medidas más relevantes fueron las reformas militares introducidas por Azaña para modernizar un Ejército sobrecargado de generales y jefes y para recortar sus tendencias pretorianas.4

Con el paso del tiempo, Grahame fue profundizando en su análisis. A principios de 1934, por ejemplo, constató que el impulso en favor del cambio había destruido viejos mecanismos de gobierno y administración a diferentes escalas y creado otros nuevos. Los republicanos trabajaban a partir de la teoría de que la Monarquía había dejado que España descendiera a desempeñar un papel reducido en el concierto europeo, con un país empobrecido en el cual más de un 40 % de la población era analfabe-

^{3.} En puridad, la primera vez no fue una pérdida, sino una enajenación voluntaria: mediante el Tratado de Bayona (8 de mayo de 1808) los Borbones, Carlos IV y Fernando VII, cedieron la corona a los Bonaparte a cambio de sendos castillos y pensiones. Nada que ver con el derribo del trono por la Gloriosa Revolución de 1868 y la condena del régimen por la vía de las urnas en abril de 1931. La matización es relevante porque resalta la secular venalidad de la dinastía, un factor clave en el deterioro cíclico de su imagen pública pese a las alharacas del monarquismo conservador de todos los tiempos

^{4.} En lo que se refiere al encono que provocaron en numerosos «africanistas», véase Blanco Escolá, pp. 120-122.

ta. Tras un largo período de élites que, alternando, usufructuaban el poder. España no había sabido o podido realizar todas sus potencialidades y el desafío estribaba en crear una «nueva» España, rompiendo viejas cadenas y abriendo las compuertas a una regeneración moral y material. De ahí los cambios fundamentales que habían encontrado expresión en la separación entre la Iglesia y el Estado, el Estatuto catalán, el problema agrario, el progreso masivo en educación, entre otros. Se pensaba que habría tiempo para todo, pero que no había que malgastarlo. Los riesgos de precipitarse demasiado apenas si se tomaron en consideración. El debate al respecto sigue coloreando la abundante historiografía existente.

Grahame llamó la atención de sus lectores en Whitehall sobre uno de los riesgos que acechaban al nuevo régimen: la posibilidad de intensificación de la conflictividad laboral. Un problema que ya existía antes de la revolución. Unas masas que sufrían privaciones sin cuento tanto en las ciudades como en particular en el campo planteaban demandas que en muchos casos no eran fáciles de satisfacer. En concreto, es lo que ocurría con los anarcosindicalistas. El Gobierno tuvo que recurrir a las fuerzas de seguridad e incluso al Ejército. Si este no se hubiera mostrado leal al poder constituido, la historia hubiese sido muy diferente. Grahame firmó su informe en enero de 1932. Como veremos, no hace falta ser un war gamer para pensar que, en gran medida, podría haberse referido a la situación en 1936, cuando ya había dejado su puesto en España.

Los diplomáticos británicos saludaron también las primeras medidas de reforma militar adoptadas en aquel año. Eran más que conscientes de que el Ejército, en cuanto a su composición y eficacia, era una creación de la Monarquía y que, por consiguiente, albergaba en su seno multitud de generales, jefes y oficiales que le eran leales. El problema estribaba, en un primer momento, en convertirlo en una fuerza fiable en que apoyarse y que pudiera complementar las fuerzas de orden público de cara a mantener un nivel adecuado de seguridad interior. A principios de año el número total de oficiales y jefes, incluidas las escalas de reserva y complemen-

- 5. Mucho de lo que precede está tomado de la introducción al informe anual de 1933. TNA: FO371/18604. En lo sucesivo, salvo información en contrario porque utilicemos una serie diferente del catálogo de tal archivo, prescindiremos del origen (Foreign Office) y de la cifra (371) que identificaba a España.
- 6. Este término era el utilizado por unos y otros; también por ciertos observadores extranjeros y, desde luego por los republicanos mismos. La acepción posterior, popularizada por el franquismo y la historiografía a él sometida, fue una distorsión, quizá para acercarla al ejemplo soviético.

to, ascendía a la astronómica cifra de 22.000, aproximadamente, de los cuales entre 14.000 y 15.000 eran activos. Al finalizar el año ya constituían solo unos 8.000. La disciplina no parecía haberse deteriorado, aunque tampoco mejorado grandemente. Había habido entre la tropa algún que otro conato de propaganda izquierdista («comunista», en el original) que se había cortado con rapidez. Llamo la atención sobre tal afirmación que será una de las constantes que recorrerán este libro.

Cuando se llamó al Ejército a que participara en el restablecimiento del orden en algunos casos la respuesta siempre había sido satisfactoria. Sin duda existía un cierto grado de insatisfacción en los rangos intermedios y superiores, pero no había habido ningún intento de imponerse al Gobierno. Esto constituía una diferencia muy marcada con los métodos anteriormente aplicados por oficiales y jefes descontentos y hacía pensar que Azaña había agujereado la burbuja de las «Juntas». La embajada sabía que se habían circulado algunos rumores de conspiración, pero nada importante había ocurrido. Nos permitimos insistir en este último extremo. Cualquiera que sea la forma en que se caractericen las opiniones británicas, no cabe dudar de la calidad de su información.

En el golpe del 10 de agosto de 1932 en Madrid, los británicos apreciaron, con toda razón, tintes monárquicos, y en la Sanjurjada sevillana destacaron la intención de formar una dictadura republicana y convocar nuevas elecciones. Era una versión que circulaba, pero absurda, como más adelante se comentó en el Foreign Office. No detectaron el menor elemento comunista. 8 Con un poco de distancia, Grahame reflexionó que era un tanto irónico que un movimiento subversivo derechista pudiera ocurrir bajo un régimen que, en el corto lapso de tiempo de dieciséis meses, había evitado que España se hundiera en un caos de extremismos. Y señaló hacia el pasado: las clases altas y privilegiadas fallaron a la hora de evitar el hundimiento de la Monarquía y estaban convencidas de que la República no tardaría en degenerar en una especie de «tiranía roja». Más tarde, cuando el gobierno Azaña había demostrado su energía a la hora de suprimir las algaradas extremistas en enero y febrero, los elementos reaccionarios empezaron a conspirar. Los conservadores españoles, al igual que los de muchos otros países, todavía mantenían una parte del

^{7.} *Spain. Annual Report.* 1931, pp. 2-4, para un resumen muy sintético, y p. 51, para la referencia al Ejército. TNA: 16508.

^{8.} Lo mismo hizo Azaña, 2008, en sus «Causas de la guerra de España». No existía. No se habío de él. No se había puesto en circulación ningún eslogan al respecto. Vendría después.

poder que habían acumulado en el pasado y su movilización habría sido formidable en caso de contar con los militares. A principios de agosto estaban convencidos de que era así. No lo fue.

La consecuencia inevitable sería que el Gobierno trataría de reducir su poder y de castigar a quienes habían instigado el golpe, dentro y fuera del Ejército. Por lo demás, Grahame no tuvo reparos en desmentir duramente al corresponsal de *The Times*, Ernest Grimaud De Caux, muy proclive a los conservadores españoles. Su crítica, pero también su ensalzamiento del presidente del Consejo, se registraron con aprobación en el Foreign Office: «Ciertamente hay por delante en España problemas inmensos pero el Sr. Azaña se las ha apañado para infundir un alto nivel de vigor y energía en el país. Obviamente es un gran hombre».

En otro despacho del 30 de agosto va había enunciado lo que podría haber ocurrido en el caso de que un puñado de jóvenes soldados y civiles fanatizados y sin control [sic] hubieran atentado contra Azaña. Una tragedia algo más que probable. La noticia habría sido difundida por los rebeldes hasta el último rincón de España. Con Azaña fuera de combate no hubiese sido imposible que Sanjurjo se hubiera hecho con el control del país, sin oposición por el resto del Ejército. Con el Gobierno sin dirección y las Cortes anuladas, el presidente Alcalá-Zamora se hubiera visto obligado a dimitir. Se habría producido una reedición del golpe de mano de Primo de Rivera, en la década precedente, y el desgraciado retorno a las condiciones que habían prevalecido a lo largo del siglo XIX con parecidas consecuencias desastrosas para la estabilidad y progreso del país. En el Foreign Office no hubo desacuerdo: «El general Sanjurio ha cometido un error muy lamentable. Ya nos llegó la noticia, poco antes del golpe, de que se había desequilibrado» (gone to pieces). ¿La consecuencia?: «Apovando estúpidamente este fracasado golpe, los aristócratas se han hecho un flaco servicio y fortalecido la República en un sentido favorable a la izquierda». 10 Creemos que esta interpretación es bastante correcta, aunque lógicamente nunca fue reconocida por los conspiradores.

^{9.} Despachos de 1.º de septiembre y 23 de agosto de 1932. TNA: 16506. La interpretación de que el golpe no iba contra la República se ha puesto de manifiesto de nuevo en la obra de Gil Honduvilla, 2017.

^{10.} Comentarios a un despacho del 20 de septiembre. TNA: 16506.

Un primer dispositivo: Gobernación y Guerra contra actividades comunistas

Las reformas militares de Azaña constituyeron un primer momento estelar en la historia de las relaciones entre el nuevo régimen republicano y las fuerzas armadas. Sus consecuencias son ampliamente conocidas, pero (siempre hay un pero en historia) no todas sus facetas lo son. En la presente obra, y en consonancia con el propósito que la anima, exploraremos una veta de particular importancia para esclarecer el futuro. Cardona hizo un análisis de las reformas y de los presupuestos intelectuales y políticos de que partió Azaña que, en sus líneas generales, me atrevo a sugerir que no ha sido superado. Con independencia, claro está, que después muchos otros autores las hayan desmenuzado más detenidamente. Para nuestros propósitos es suficiente indicar que la intención estribaba en acercar un Ejército esclerotizado, traumatizado y brutalizado por la larga guerra de Marruecos, al modelo que Azaña mejor conocía (o menos desconocía). Tal era el francés. Un Ejército sometido al poder civil, de alta capacidad intelectual entre sus cuadros y orientado esencialmente hacia las tareas de la defensa exterior. De subrayar que ninguna otra fuerza política, ni de izquierdas ni de derechas, a pesar del tan encumbrado Gil Robles, ofreció jamás una alternativa válida (excepto, y esto lo escribo con muy mala uva, para preparar mejor al Ejército en la intervención interior).

Cardona, sin embargo, reconoció dos problemas fundamentales. El primero, que querer implantar en España un modelo como el existente en Francia en 1918-1920 era ilusorio en unos años en que numerosos ejércitos en el continente se habían politizado e ideologizado al calor de tremendas tensiones políticas. Fue el caso, hasta cierto punto, de la propia Francia, pero con toda claridad en Italia y Alemania. En muchos otros países apoyaban regímenes más o menos dictatoriales. El segundo problema fue que, a pesar de sus mejores intenciones, el peso del mantenimiento del orden público tuvo que descansar en las fuerzas armadas. Cito a Cardona:

El Gobierno careció de imaginación ante el orden público. Repitió el error histórico de emplear al Ejército en tareas policiales. Desde el primer momento, la tranquilidad de la calle se mantuvo militarmente, incluso con la proclamación del estado de guerra. La Guardia Civil no fue transformada, conservó su carácter y dotación militar, sin ser provista de medios antidisturbios. Armada con sus fusiles de siempre, recibió las habituales órdenes de

contener las manifestaciones. Regida por una gran disciplina y un rígido reglamento, la actuación de la Guardia Civil se saldó, como en el pasado, con graves implicaciones.¹¹

En pleno período de puesta en práctica de la reforma militar quizá pasó inadvertida para muchos, tanto dentro como fuera del Ejército, una disposición que habría de tener consecuencias para la historia que trata de alumbrar este libro. El 28 de marzo de 1932 (*Gaceta* del 30) se creó una Secretaría Técnica (ST) afecta a la Dirección de Seguridad (DGS) en el Ministerio de la Gobernación. El decreto afirmó que de lo que se trataba era de «estudiar y proponer la coordinación de los servicios de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia e Instituto de la Guardia Civil». El titular de la cartera se llamaba Santiago Casares Quiroga. Al tiempo se nombró a un responsable: el teniente coronel de la Guardia Civil José Casellas Puigdemasa.

Podemos suponer, sin entrar en detalles históricos, qué es lo que incitó a tal medida. En su diario, y en la entrada correspondiente al 11 de enero, Azaña consignó que a través de un cabo de Aviación se había tenido noticias de un transporte de armas desde Los Alcázares a Madrid. De ello le informó el entonces comandante Juan Hernández Saravia, jefe de su Gabinete en el Ministerio de la Guerra. Aunque las noticias eran confusas, parecía que se trataba de algo que tenía que ver con los comunistas. Entonces Azaña añadió, a modo de explicación en su diario, que «tenemos un servicio especial que nos hace Valdivia en la DGS, con independencia de la policía, que sirve de poco». 13

Un objetivo que no se recogió en el decreto fundacional fue, por consiguiente, el de seguir e informar al Mando acerca de las actividades comunistas en el interior del Ejército y de la Marina. Ciertamente, el PCE, todavía en su fase tercerista, era un partido legal, pero con un peso escaso en la vida española. En diciembre de 1931, el PCE rondaba la «inmensa» cifra de los 8.800 afiliados, con una escasa implantación territorial fuera de Vizcaya, algunas zonas de Asturias y Sevilla, pero la obsesión anticomunista era patente. Ya el manifiesto justificativo del golpe del general Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) adujo, entre sus motivaciones, la «impune propaganda comunista». Por aquellas fechas, el número

^{11.} Cardona, pp. 120-130 y 177 para la cita.

^{12.} Mencionada por primera vez en Heiberg/Ros Agudo, pp. 3s. La ST se suprimió durante el bienio radical-cedista.

^{13.} Azaña, I, 1978, p. 378. A Valdivia nos referiremos posteriormente.

de comunistas españoles difícilmente sobrepasaba el rango de las centenas, lo suficiente como para camuflar sus actividades en Vizcaya, su solar matriz, bajo la denominación de un supuesto club de fútbol, el Oriente F. C. Hay, pues, que pensar que «comunismo» era un término comodín que las autoridades aplicaban a todas aquellas organizaciones de izquierda (socialistas, sindicalistas) o asimiladas (anarquistas) que podían amenazar al orden social.

Habría sido perfectamente comprensible que la atención de la DGS se hubiera focalizado en los movimientos anarcosindicalistas que va habían hecho sentir su actitud combativa ante el nuevo régimen. En la Subsecretaría de Gobernación existía, además, una poderosa Sección de Orden Público que, como veremos, conectaba con el Ministerio de Estado para, entre otras ocupaciones, seguir la pista de los adversarios de la República en el extranjero. Con todo, los manejos comunistas, que desde hacía años distorsionaba y abultaba la prensa conservadora, fueron el blanco, o uno de los blancos, del nuevo organismo. La confusión al respecto era desde luego notable, puesto que, cuando ocurrieron los hechos del 22 de julio de 1931 en Sevilla —huelga general contundentemente reprimida por las fuerzas del orden y el ejército, con aplicación de ley de fugas a cuatro detenidos en el parque de María Luisa y cañoneo de la taberna que servía de centro obrero incluidos—, Azaña atribuyó la responsabilidad a los anarquistas. Sin embargo, quienes se encontraban tras la convocatoria eran los comunistas que controlaban varios sindicatos de la CNT local, con José Díaz a la cabeza.

En todo caso, la ST no tardó en reorganizarse, conectando con preocupaciones que ya habían existido anteriormente. El 25 de abril, el ministro de la Guerra y presidente del Consejo tomó una serie de medidas a las que de pasada ha hecho referencia González Calleja. ¹⁴ Azaña ordenó que lo que ya existía en su ministerio, a saber, el NICE (Negociado de Información Comunista del Ejército), ¹⁵ debería relacionarse con una serie de órganos también desconocidos hasta el momento. El primero era la Sec-

^{14.} González Calleja, 2014, pp. 255s.

^{15.} Azaña, 1997, p. 6, señaló su existencia. Estaba bien organizado y funcionaba con puntualidad. Comenzaba en las cajas de recluta y se extendía a los cuerpos y unidades. El director general de Seguridad le informó el 28 de julio de 1932 sobre sus resultados, que no le impresionaron. La propaganda comunista se basaba en temas que no interesaban a los braceros españoles («la guerra imperialista en Oriente») o la «propaganda contra el cuartel», «un remedo de lo que escribían en Francia contra los Batallones de África». Pero había muy pocos, si no poquísimos, comunistas. Como veremos estos dos temas prosiguieron alimentando la agitación comunista.

ción de Agentes de la Marina y del Ejército (SAME) que, para la ejecución de su cometido fuera de los cuarteles, dispondría de la DGS. El NICE, por su parte, lo haría de forma constante y directa.¹⁶

En nombre del jefe del EMC (Manuel Goded, de 1931 a 1932, y Carlos Masquelet, de 1933 a 1935), la DGS sería otro de los centros con los que el NICE debía entrar en relación, a fin de recoger informaciones sobre sucesos o hechos que ocurriesen fuera de los cuarteles (propaganda subversiva, etc.). Debía tratarse de casos en los que pudiera producirse una repercusión en los recintos militares y que, por consiguiente, interesarían a los mandos. Recíprocamente, estos deberían tener a la DGS al corriente de los hechos colectivos o personales que pudieran ser susceptibles de suscitar su atención. Por último, el NICE también debía relacionarse con el Negociado de Información Comunista de la Armada (NICA), con el fin de establecer el correspondiente intercambio de noticias.¹⁷

Se observa, pues, la secuencia. De ella se desprende que tanto en el Ministerio de la Guerra como en el de Marina existían, antes de 1932, pequeñas unidades burocráticas (perfectamente ocultas en los organigramas de acceso público) con fines similares: vigilar eventuales manipulaciones de corte comunista entre el personal de las fuerzas armadas. Se trataba de seguir actuaciones sospechosas de soldados (marinos) y suboficiales. No creemos que en aquellos momentos la vigilancia se extendiera a oficiales o a jefes. Y, conociendo la terminología de la época, en especial en los círculos castrenses, pensamos que hay que tomar el sustantivo o adjetivo «comunista» como sinónimo de extremistas. Tal vez incluso como sinónimo de anarcosindicalistas.

Por desgracia, no he hallado la menor constancia del papeleo que generase esta relación. No he visto nada al respecto en los Archivos Militares de Ávila, aunque es posible que algo pueda encontrarse en otros o que no haya sido capaz de identificar. No sorprende, ciertamente, el caso de la DGS. Es sabido que ya durante la Monarquía, y muy particularmente bajo el período de brutal gestión del general Emilio Mola, había prestado mucha atención a las (modestas) actividades comunistas, pero de la génesis del NICE, de la NICA y de la SAME reconozco no haber tenido idea.

^{16.} Puestos a desinformar, también lo haría el general Esteban-Infantes, p. 190, para quien este tipo de oficinas tenían como misión principal «ejercer una vigilancia solapada sobre el Ejército». A la República, evidentemente, ni las gracias y, si se me apura, tampoco al régimen anterior.

^{17.} AGMAV: C. 2175.1.1./8.

Naturalmente, Azaña tomó con rapidez medidas para dotar de personal este ámbito que podríamos caracterizar de seguridad interior en el seno de las fuerzas armadas. El que se incorporaría al NICE procedería del que por aquel entonces prestaba servicios en la ST. Es decir, se efectuaría un transvase desde Gobernación. Esto significa que debió de existir una relación previa entre ambos departamentos. Al frente del equipo en el EMC se situaron el teniente coronel Antonio Uguet Torres y el comandante Bruno Quintana Caicedo, que estaría al servicio de otros ministerios (léase Gobernación). Se trata de nombres que, por desgracia, nos son totalmente desconocidos.

Según su hoja de servicios, Uguet fue uno de los varios jefes u oficiales que habían estudiado en la Escuela Superior de Guerra de París. El posterior jefe del SIPM franquista en la guerra civil, José Ungría, también había seguido cursos en ella. A su regreso, Uguet se había reincorporado al Ministerio de la Guerra y va en julio de 1931 se le destinó al EMC. Pasó un año adscrito a la DGS, lo que significa que entre ambos organismos había un cierto trasvase de personal especializado cuyas realizaciones nos son desconocidas en toda su amplitud. También se ocupaba de la inteligencia exterior, y en este sentido se le encargaron varias comisiones de servicio de naturaleza reservada a París y Ginebra. En relación con esta vertiente de la SSE, he localizado por fortuna un fragmento de la memoria, fechada el 18 de julio de 1932, en el que dio cuenta del tipo de actividades a que se dedicaba. En la capital del Sena se le recibió con bandejas de plata. Algo que le pareció desproporcionado. También se lo parecieron las atenciones que los franceses le prodigaron. La causa no tardó en descubrirla: sus anfitriones deseaban vivamente establecer una relación directa de ejército a ejército. Podríamos pensar que era cosa normal tras el advenimiento de la República, pero según Uguet:

El Ejército francés al menos tiene vuelta la atención hacia España en este momento y no es la actual de las épocas en que se miraba hacia aquí con indiferencia sin dar valor alguno a nuestra amistad. Lejos de eso hoy la buscan y la desean y le dan bastante valor. ¿Con qué propósito? Ello puede tener dos objetos: primero, procurarse datos que puedan interesarles, no ya respecto al comunismo sino relacionados con el problema general de su defensa militar; segundo, ir estrechando una amistad que nos pueda conducir a una neutralidad efectiva y aun mejor a una amistad armada en caso de conflicto europeo.

Eran suposiciones perfectamente plausibles. Uguet detectó que, si existía en Madrid algún interés, el Deuxième Bureau estaría encantado

de recibir una indicación para una visita a España. Es difícil que en el Palacio de Buenavista se ignorase que el jefe del espionaje francés era el agregado militar a la embajada de Francia, pero a lo mejor no lo sabían. Uguet consideraba que si se estrechaba la relación y se repitieran las visitas cabría esperar que por parte francesa la información se hiciera más amplia, extendiéndola a otros asuntos que en París pudieran interesar. A los españoles les era útil obtener información sobre comunismo relativa a España, que los franceses podían allegar por medio de su propio servicio de agentes y confidentes establecido en Rusia. 18

No sabemos en qué quedó la cosa. Lo que sí sabemos es que, en febrero de 1934, Uguet volvió de nuevo a París. Ahora aclaró lo que había perseguido en aquella primera ocasión: intercambios de información que convinieran a la acción anticomunista en el Ejército español. Los franceses, en el ínterin, se interesaban por crear en el seno de este un estado de opinión favorable por lo menos a una neutralidad española en caso de conflicto europeo. En 1934 no insinuaron los franceses, como en otras ocasiones, que los españoles les proporcionasen información sobre actividades de países que les interesaban especialmente. Tales insinuaciones se habían desechado con discreción en Madrid. El motivo nos es desconocido.

Así pues, las conversaciones bajo un gobierno radical como el que existía en España en aquel momento giraron sobre dos temas. Uno muy concreto fue el del apoyo mutuo entre los dos países para la acción anticomunista. Otro más general, la conveniencia de mantener y estrechar una relación que llegara a ser una amistad, con posibles consecuencias en caso de una nueva guerra europea. Este tema se abordó en diferentes ocasiones en tono cordial, suponemos que bien regadas «en las muchas comidas» y paseos.

Uguet se encontró con dos compañeros de promoción y con la libertad de expresión y la confianza que ello daba abordaron dichas cuestiones desde el punto de vista de las ventajas que para todos tendría una relación estrecha entre los oficiales de ambos países. Siguiendo instrucciones, el jefe de la SSE extremó las atenciones y los signos de camaradería en el terreno particular y personal, pero se abstuvo de emitir un juicio concreto, para evitar que pudiera interpretarse como reflejo del pensamiento oficial. De nuevo no hemos encontrado constancia alguna de las consecuencias de tales contactos.

^{18.} AGMAV: C. 2175.2.1/52s.

^{19.} Ibid., 2175.2.1/49.

La hoja de servicios de Uguet es muda en cuanto a detalles de su actividad. Sin embargo, nos parece significativo que el 18 de julio se adhiriera al «Glorioso Movimiento Nacional» y que fuera encarcelado en San Antón. De aquí, ignoramos por qué medios, se refugió en la Legación de Noruega en diciembre. En mayo de 1937 pasó a la zona sublevada. Exonerado completamente, tuvo una brillante carrera durante la guerra en diversos frentes. Son actividades que no nos interesan aquí. Falleció en Madrid, como general de división y fiscal militar del CSJM, en 1950 (*ABC* del 13 de julio). Por el momento no es preciso abundar en su persona.

En relación con el comandante Quintana, su hoja de servicios muestra que se trataba de un jefe que en los años 1929 a 1931 había seguido brillantemente los cursos de la Escuela Superior de Guerra en Turín, participado en numerosas maniobras y prestado servicio en unidades operativas del *Regio Esercito*. Nos sorprende una tan larga duración de su comisión en el extranjero. Los certificados italianos dan cuenta de su alta aptitud militar. Podrían encubrir actividades de inteligencia o no. Tampoco hemos encontrado muchos detalles de en qué consistiera su trabajo tras su reincorporación al EMC durante 1932. Sí sabemos que en 1933 fue nombrado jefe de enlace entre los ministerios de Guerra y Gobernación, aunque disfrazando esta relación bajo un destino ficticio en el Centro de Movilización y Reserva n.º 1.

Es decir, informaciones procedentes de fuentes distintas casan perfectamente. Por razones inexplicadas, en junio fue nombrado agregado militar a las legaciones en Polonia, Rumania y Yugoslavia, donde no estuvo más de dos años. Se reincorporó al EMC y fue destinado a la secretaría del Consejo Superior de Guerra. No podemos saber si se trataba de un puesto de cobertura que tapase trabajos de inteligencia interior o, eventualmente, de contrainteligencia. Lo único que hemos podido averiguar es que tras la sublevación de 1936 fue encarcelado y que murió en Paracuellos.

Lo que nos parece significativo de ambos casos es que dos militares que probablemente tenían sentimientos derechistas estuvieran encargados de vigilar actividades de los soldados y suboficiales de izquierdas. También nos preguntamos si fue numeroso el grupo de jefes y oficiales generales que hubieran estado al corriente de tal tipo de servicios, obviamente antiizquierdistas. En todo caso, la cúpula militar superior no podría haber desconocido que el elemento civil que regía los dos ministerios (Guerra y Marina) continuó e incluso potenció la labor de seguimiento de movimientos subversivos en el seno de las fuerzas armadas. Esto hubiera debido amortiguar las estridentes críticas que las reformas de Azaña ha-

bían despertado en los medios militares. Como no parece que tal fuera el caso, cabría deducir que lo que estaba en juego no era el juicio profesional que merecían, sino el impacto en perspectivas profesionales —ya que no en los bolsillos— de los afectados. Una parte inmensa del estamento militar se había acostumbrado a prebendas y perspectivas, siempre lentas, de ascenso, y lo que menos les preocupaba era el perfeccionamiento técnico y la defensa de su PATRIA contra la subversión.

Ahora bien, dado que todavía se desconocen la dotación y los nombres de los servicios que siguieron las actividades clandestinas comunistas (o anarcosindicalistas o socialistas), no podemos extraer conclusiones demasiado operativas. Nos limitamos a suscitar la cuestión clásica ya planteada por Juvenal: *Quis custodiet ipsos custodes?* Es decir, ¿quién vigila a los vigilantes? Este planteamiento volveremos a suscitarlo más adelante.

Nos importa recalcar, para lo que vendrá, que la anterior estructuración del servicio de vigilancia no pudieron ignorarla los correspondientes ministros. Los de Marina fueron Santiago Casares Quiroga, José Giral Pereira y Lluís Companys. Y los de Gobernación, el ya mencionado Casares Quiroga (14 de octubre de 1931 a 12 de septiembre de 1933). Volveremos a encontrarnos a Azaña como presidente de la República y a Casares como presidente del Consejo y ministro de la Guerra en el período crítico de mayo a julio de 1936.

Continuando con el desarrollo orgánico, debemos destacar que una Orden del Ministerio de la Guerra dirigida al de Gobernación de 25 de abril de 1933 estableció que el capitán de Infantería Alfredo Tourné, perteneciente al Servicio de Aviación, y el sargento del mismo Isidro Manquillo, afectados a la ST de la DGS, pasarían a una oficina permanente de enlace entre Guerra, Marina y Gobernación.²⁰ Del primero sabemos que era hombre de la máxima confianza de Azaña, quien le utilizó en los preparativos para desbaratar la Sanjurjada. Suponemos que el segundo fue uno de sus colaboradores. Por lo demás, creemos necesario indicar que cuando Azaña llegó al ministerio en 1931 había ya un enlace entre este y la Dirección de la Guardia Civil que ejercía un militar del cuerpo de Ingenieros geógrafos del Ejército llamado Ubaldo Azpiazu Artazu, a quien menciona en sus memorias caracterizándolo como «gallego, muy metesillas y sacabancos, propiamente un zascandil».²¹

^{20.} Para todo lo que antecede remitimos a AGMAV: C. 2175. 1. 1/8 y 11s, respectivamente.

^{21.} Azaña, I, 1978, p. 441.

De manera pública (*Gaceta* del 24 de septiembre de 1933) se creó en la DGS, y a las órdenes inmediatas del director general de Seguridad, una denominada Oficina de Información y Enlace (OIE). De ella se hizo cargo, con carácter interino, el capitán de la Guardia Civil Vicente Santiago Hodson (*Gaceta* del 28 de septiembre de 1933). Se le confirmó con carácter permanente varios meses más tarde (*Gaceta* del 24 de julio de 1934).²² Lógicamente la OIE se mencionó en la prensa pero, salvo error u omisión, tampoco hemos encontrado documentación interesante acerca del resultado de su labor hasta unos momentos, en 1935, a los que nos referiremos ulteriormente.²³ Santiago será uno de los protagonistas de nuestro relato, por lo que conviene dar unas pinceladas sobre él.

Nacido en Santa Marta (Badajoz) en 1899, de padre comandante de la Guardia Civil, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo en 1916. Salió tres años más tarde como alférez. En 1921 ascendió a teniente y fue destinado a Marruecos y a Regulares. Participó en diversas campañas, fue herido, obtuvo varias condecoraciones y en 1923 pasó a la Guardia Civil, donde sirvió como profesor en el colegio de Guardias Jóvenes hasta 1928. Entonces fue trasladado a la segunda sección en la Dirección General de la Guardia Civil. Se distinguió en la defensa del Ministerio de la Guerra durante la Sanjurjada obedeciendo órdenes verbales de Azaña. Esto es lo que figura en su hoja de servicios, pero también recibió instrucciones del oficial de servicio en aquella noche, Juan Hernández Saravia, hombre de confianza del ministro. Al menos esto es lo que decla-

- 22. Según Huerta Barajas, p. 378, fue una de las escasas realizaciones del efímero ministro del ramo, Diego Martínez Barrio. La idea, afirma, estribaba en «evitar los levantamientos anarquistas de agosto y finales de 1932». Curioso que no mencionara los de enero en la cuenca del Llobregat. Entendemos que tal vez quiso decir la repetición de tal tipo de algaradas. No es, pues, correcto afirmar, como señala este autor, que dicha oficina fue una creación del entonces director general de Seguridad, José Valdivia y Garci-Borrón. Este último, Santiago, el jefe de Policía y el gobernador civil de Zaragoza fueron objeto de un homenaje, presidido por Lerroux, por el éxito en reprimir la asonada anarquista de diciembre de 1933 (*ABC*, 30 de enero de 1934).
- 23. En la historiografía destaca, por su excepcionalidad, González Calleja, 2014, p. 65, a quien complementamos en este epígrafe. Discrepo de Preston, 2011, pp. 104s y 695, en la caracterización, sin documentos, que hace de Santiago un «acérrimo antiizquierdista». Se basa en un supuesto informe de un director general de Seguridad ulterior, ligado a los escándalos lerrouxianos, pero no cita su fuente. Tal caracterización se ha subido a la entrada de Santiago en Wikipedia.
- 24. Portela, 1988b, p. 42, señala en su diario que, con ayuda de una docena de guardias civiles, «impidió que [el general José] Cavalcanti y consortes se apoderaran del Ministerio y del ministro Azaña». La anotación es correcta, aunque en el Palacio de Buenavista hubo también otros efectivos.

ró el propio Santiago ante un inspector del Cuerpo de Vigilancia en la DGS el 4 de noviembre del mismo año.²⁵

A mayor abundamiento, Azaña lo utilizó como emisario suyo, junto con Francisco Buzón, para que informara de ciertas actuaciones poco claras en la jefatura de las guarniciones de Marruecos, un tema entonces muy delicado. Más tarde, por antigüedad, ascendió a capitán. En noviembre fue destinado al Cuerpo de Seguridad, en el que hubo de solicitar la baja tras su nombramiento al frente de la OIE. En este nuevo destino le aguardaba un futuro curioso y hasta ahora ampliamente ignorado. Volveremos a encontrárnoslo junto con la ingratitud de Azaña.

Que el Gobierno hacía bien en sospechar se demostraría a finales de dicho año en un incidente que, por lo que sabemos, no trascendió al público, cortesía de la censura de prensa. A principios de diciembre el agregado militar británico, el comandante M. M. Parry-Jones, informó a su embajador que por una fuente que, obviamente, no identificó se había enterado de un hecho preocupante. Unos días antes un grupo bastante numeroso de soldados del Regimiento de Infantería n.º 1 de la guarnición de Madrid se había alborotado y anunciado a voces su propósito de salir a la calle a unirse a un motín «comunista». Los suboficiales y los oficiales se apresuraron a asegurar el control. El agregado militar señaló que aproximadamente el 60 % de los hombres en filas llevaban en ella poco más de un mes. No era, pues, sorprendente que aportaran a los cuarteles opiniones y experiencias que no tenían nada que ver con la vida militar. Por lo demás, no cabía olvidar que en el pasado había habido rumores acerca de agitación izquierdista en el Ejército (utilizó el adjetivo «comunista») y que las autoridades habían tomado medidas muy amplias para yugularla en ciernes. Él, desde luego, no prestaba demasiada importancia al incidente. La reacción en el Foreign Office fue muy clara: el presidente del Consejo y ministro de la Guerra estaba decidido a mantener al Ejército en un estado de subordinación a la autoridad del Gobierno. Otro comentarista añadió que Azaña había demostrado su preocupación por mejorar la suerte de los trabajadores y los militares no podían razonablemente pensar que se inclinaría hacia la derecha después de la débâcle [sic] de la Sanjurjada meses antes.²⁷ aunque ciertamente la extrema izquierda así lo manifestaba.

^{25.} CDMH: PS-Serie Militar, 342.

^{26.} Azaña, 1997, pp. 17, 49, 55 y 65.

^{27.} TNA: 16509. Cardona, p. 191, escribió hace mucho tiempo que se trató de un pronunciamiento anticuado ya: «Instruyó a muchos conspiradores. El asalto al poder debía consistir en un amplio movimiento militar, planificado concienzudamente».

Señalemos que, más que a conatos revolucionarios, cuya base real era inexistente, la mentalidad castrense de la época era muy sensible a la propaganda sobre la acción disolvente del comunismo en el seno de los puntales del orden establecido, como era el Ejército. La existencia del «aparato A-M» era un lugar común recurrente en la literatura, máxime cuando se encargaron de pregonarla conversos que habían estado en el vientre de la ballena, como Enrique Matorras, antiguo dirigente de la Juventud Comunista y pasado al sindicalismo católico.²⁸

Otro dispositivo: Estado y Gobernación contra los manejos monárquicos en Francia

Ya hemos visto que en los pocos despachos de *sir* George Grahame mencionados los monárquicos aparecen, con ciertos militares, como los enemigos jurados de la República. Lo eran, sin la menor duda. En la anterior investigación di cuenta del seguimiento que se les hizo en Francia. Sin repetir los resultados en ella expuestos, ahora ofreceré un complemento ampliado a otros casos en función de la nueva documentación que he podido localizar.

No me ha sido posible hallar ningún ejemplar de las instrucciones que al efecto cursaría el nuevo ministro de Estado tras la instauración de la República. Fue, ¡pásmese el lector!, Alejandro Lerroux. Su subsecretario, Francisco Agramonte, un profesional que escribió sus memorias y publicó en la España franquista, no entró en el tema que aquí nos interesa. Sin embargo, hay que suponer que muchos de los integrantes del cuerpo diplomático en el exterior obrarían casi automáticamente y que informaron a Madrid de las llegadas masivas a sus circunscripciones de quienes abandonaron España.

Entre las primeras comunicaciones que he encontrado figuran las que emitió el cónsul general en Gibraltar, Luciano López Ferrer, el 16 y el 22 de mayo de 1931. Se trataba de familias procedentes sobre todo de Sevilla, Jerez y Málaga. Para entonces algunas habían continuado su periplo por el extranjero, otras se proponían hacerlo próximamente y las menos pensaban en regresar a sus domicilios, aun cuando entendían que no corrían peligro alguno. Había que suponer que todos ellos habían llevado consigo objetos de valor y sumas considerables. Se basaba el cónsul general en los depósitos que en pesetas se habían realizado en los bancos loca-

les. De aquí que recomendase que se extremara la vigilancia aduanera, sobre todo en la de La Línea.

En el momento de redactar el despacho se encontraban en Gibraltar los marqueses de Larios, los condes de los Andes, los duques del Infantado, el de Medina Sidonia, las duquesas de Montemar, Algeciras y de Osuna, amén de muchos otros. También había buscado refugio el obispo de Málaga. Al conde de los Andes habían ido a visitarle monárquicos residentes en los pueblos cercanos al Peñón, algo que hoy puede entenderse como una premonición del destacado papel que en la conspiración subsiguiente no tardaría en desempeñar desde Francia, en donde terminó residiendo. Tras la Sanjurjada se produjo un nuevo éxodo, aunque más pequeño. De él cursó informaciones a Madrid el 27 de agosto de 1932 su sucesor, Antonio Suqué. En Gibraltar habían pasado largas temporadas miembros de las familias Benjumea e Ibarra, pero el obispo de Málaga había retornado.²⁹

Como ya se indicó en la obra anterior, y subrayo en esta, la Sanjurjada representó un hito en la doble conexión fascista y monárquica, que sin embargo no parece que fuese captado por los vigilantes ojos británicos. Existía. El 18 de agosto la Subsecretaría de Comunicaciones informó a la del Ministerio de la Gobernación y al Ministerio de Estado que los telegrafistas sevillanos que habían acudido a una inmensa fiesta en el Retiro³⁰ habían declarado un curioso incidente acaecido el mismo día de la sublevación. El cónsul italiano pretendió que Telégrafos cursara un telegrama redactado en su idioma y en el que se daba por triunfante el intento de golpe y se afirmaba que el pueblo lo secundaba con entusiasmo. Para evitar el envío de tal comunicación, el oficial de Telégrafos indicó al expedidor que sin la firma del general Sanjurjo no podía hacerse cargo de ella. Al cabo de cierto tiempo volvió el cónsul con el requisito cumplimentado. Se le informó entonces que, aun así, no se cursaría el telegrama. No contento, el cónsul siguió en automóvil a algunos de los oficiales cuando salieron de la Central para dar cuenta de lo sucedido.³¹

Esta pequeña anécdota es relevante por varios motivos. Sabemos que al cónsul italiano se le habían acercado meses antes personas descontentas con el nuevo régimen republicano. También que el aviador Juan An-

^{29.} AGA: 82/2408.

^{30.} Detalles en Azaña, 1997, p. 29: muchedumbre inmensa, quizá más de cien mil personas, ovaciones delirantes, condecoraciones, desfile, etc.

^{31.} AGA: 82/3264. Mientras no se indique lo contrario, la documentación manejada procede de este legajo.

tonio Ansaldo (un hombre fundamental en los contactos clandestinos con los fascistas) había viajado a Italia pocos meses antes. Esto puede indicar que el cónsul hubiera recibido instrucciones de proceder como lo hizo. También el que Sanjurjo firmara el telegrama manifiesta, salvo error, que no le ocasionó la menor sorpresa. El impacto que la información reseñada produjo en el Ministerio de Estado no es difícil de estimar y reforzaría las medidas que ya se habían comunicado a la red diplomática y consular española implantada en Francia.

En la masa de comunicaciones de esta red con las autoridades centrales destacan dos aspectos. El primero es que muchos de los diplomáticos en puestos del país vecino se esforzaron por informar de los exiliados o refugiados siguiendo las instrucciones emanadas de Madrid. Así, por ejemplo, a uno de guienes en 1936 se pasaron a los sublevados y que destacó en la publicística del franquismo, el entonces cónsul en Bayona, Virgilio Sevillano Carbajal, le faltó tiempo para dar pelos y señales de los monárquicos más significados que vivían en su distrito. El 17 de agosto informó de algunos nombres muy importantes: Gabriel Maura y Gamazo, José Calvo Sotelo, José Antonio del Arco, Juan de la Cierva y Peñafiel, Francisco Moreno y Zulueta, etc. Sin embargo, días más tarde, Sevillano reconoció que le era difícil identificar a quienes de entre ellos desplegaban una actividad política, en medio de rumores contradictorios que iban desde la simple murmuración antirrepublicana al empeño genuino en labores promonárquicas. Distinguió en particular no a Calvo Sotelo o a Andes, sino a Antonio del Arco, conde de Arcentales. Acompañó una larga lista de más de noventa nombres de los inscritos en el consulado y añadió cuatro no inscritos, así como una cincuentena de entre los inscritos y residentes habituales, sin contar con los cónyuges correspondientes. Las listas se leen en ocasiones como tomadas de un pequeño Gotha de la nobleza española.³²

El Gobierno destinó a agentes de policía a ciertas embajadas e incluso consulados. En ello siguió pautas que tenían sus raíces en la experiencia anterior. En sus memorias, Mola, que fue el último director general de Seguridad antes del advenimiento de la República, dio algunas indicaciones de la labor que sus agentes y sus redes de informadores desarrollaron en el extranjero, particularmente en París. Es de suponer que el nuevo Gobierno no continuó con ellos, pero no hemos logrado documentarlo. El sucesor de Mola fue un general auditor del Ejército, Carlos Blanco Pérez, impuesto por Alcalá-Zamora al ministro de Gobernación Miguel Maura y que apenas duró en el cargo. No le daría tiempo de realizar

grandes cambios, pero sí mantuvo a un policía, Francisco Mata Casas, que estaba agregado a la embajada en París.³³ Su sucesor a partir de mayo de 1931 fue Ángel Galarza, entonces miembro del Partido Radical Socialista y conocido adversario de la dictadura. Permaneció en el puesto hasta diciembre de aquel año.³⁴ Le siguió Ricardo Herraiz durante dos meses y medio. La expansión de la red de agentes en el exterior debió de producirse con ellos o con su sucesor, Arturo Menéndez, artillero y del Servicio de Aviación, nombrado en marzo de 1932 y que cesó a causa de los acontecimientos de Casas Viejas.³⁵ Entre los contactos en la DGS de Matas figuró el inspector del Cuerpo de Investigación y Vigilancia Samuel Martín Domínguez, de quien no hemos encontrado muchos datos, salvo que fue separado del servicio por los vencedores en la guerra civil en 1939.³⁶

Sea como sea, para nuestros propósitos destacan como puestos importantes para agentes de la DGS los de París, Roma, Bruselas y el consulado de Marsella. Sus informaciones, unidas a las obtenidas por canales y contactos diplomáticos con las autoridades de los países de acogida, presentan un cuadro bastante completo del tipo de actividades abiertas, es decir, de propaganda antirrepublicana. A veces con insinuaciones que no sabemos si cayeron bien en Madrid pero que, ciertamente, para los encargados de la seguridad de la República no podían dejar de ser interesantes. En el período más importante desde nuestro punto de vista, el Ministerio de Estado transmitió tal tipo de informaciones al de Gobernación, ya regentado por Casares Quiroga. Merece destacarse tal extremo porque este último parece que se olvidó de aquellas actividades cuando ocupó la presidencia del Consejo v, para colmo, el Ministerio de la Guerra en mayo de 1936. Es más, uno de los subsecretarios de Estado, Justo Gómez Ocerín, que transmitía formalmente las informaciones, llegó a ser embajador en Roma en el período que precedió al golpe. ¿También se olvidó?³⁷

- 33. Pech, p. 33. En dicha embajada radicaban, desde tiempo inmemorial, agentes de policía que disponían de una red de informadores para seguir la pista a oponentes a la dictadura primorriverista, incluidos elementos anarquistas.
- 34. Sin referencia a alguna disposición concreta, aparecida en la *Gaceta*, o por lo menos a una fecha en la historia oficial del Ministerio del Interior, se afirma, p. 122, que «se creó el Gabinete de Enlace [sic] [...] con la finalidad de recoger y controlar todos los antecedentes e informes de interés para la seguridad del Estado».
 - 35. Huerta Barajas, pp. 385s.
- 36. Muestras de la correspondencia inicial de Casas en 1931 se encuentran en CDMH, PS-Madrid, CO232.
- 37. Cesó en el puesto en mayo de 1936. Se adhirió a los sublevados en octubre, pero fue separado del servicio. Reingresó a finales de los años cuarenta. Pérez Ruiz, pp. 74, 120 y 177.

Las representaciones diplomáticas y consulares recibieron fondos para pagar a confidentes. Se conservan multitud de informaciones puntuales, con frecuencia exageradas, pero no sabemos si en Madrid el aparato diplomático o el de seguridad las filtraba adecuadamente o no. Para el período posterior a la Sanjurjada hemos dado una muestra en la obra precedente. En la presente nos llama la atención un despacho del 4 de enero de 1933 procedente del consulado de Bayona, al frente del cual seguía Sevillano Carbajal. Se le había dicho, con mayor amplitud que la acostumbrada, que se preparaba un movimiento para dentro de dos meses, dirigido por las mismas personas que las del 10 de agosto, pero con la ayuda esta vez de Lerroux y parte de su partido, pues «así como en la intentona última no quiso Lerroux dar su apoyo, aunque consintió, esta vez está dispuesto a dar su apoyo efectivo». Sevillano continuó: «Cuentan con dinero de los radicales, y según ha podido deducir el confidente el Banco Herrero de Oviedo serviría de banquero en esta nueva intentona».

En tal intento parecía que estaban involucrados diversos personajes, más o menos conocidos, pero nosotros destacamos la referencia a «varios oficiales de Caballería de Alcalá de Henares», porque, efectivamente, hubo un conato de revuelta en tal ciudad. En este despacho surge, que sepamos por primera vez, la noción de que el «Jefe que se nombrará será con toda seguridad FRANCO» (lo ponemos en itálicas con el nombre en mayúsculas para resaltarlo).

También es interesante el despacho de 4 de enero por otra razón. Sevillano solicitó, con toda lógica, que se le dijera si las informaciones que transmitía se confirmaban o no, para poder comprobar de alguna manera la veracidad, o falta de ella, de su o sus confidentes. Él se limitaba a transmitir lo que le decían «sin poder hacer afirmación alguna sobre su veracidad». Nos tememos que pudo no tener demasiadas respuestas.

De nuevo surge el nombre de FRANCO en una confidencia transmitida por el mismo consulado en Bayona y que Gómez Ocerín reenvió el 9 de febrero de 1933 a su colega de Gobernación, Carlos Esplá. Decía, entre otros temas, lo siguiente: «Sigo advirtiendo General Franco muy en contacto con París y allí preparando muchas cosas».

Estos despachos tienen gran importancia. Son los primeros, insistimos, en que el nombre del futuro Caudillo aparece, aunque no nos consta que Franco estuviera entonces mezclado en ninguna conspiración. Hemos de especular que los informantes del cónsul en Bayona,³⁸ entre quie-

^{38.} Autor de un famoso libro (La España... ¿de quién? Ingleses, franceses y alemanes en este país, Gráficas Sánchez, Madrid, 1936). En el bienio radical-cedista fue jefe de

nes abundaban exiliados monárquicos y sus séquitos, murmuraban el nombre del general como candidato posible a un golpe deseado, pero en aquellos momentos poco practicable. Bayona terminó convirtiéndose en un punto importante a la hora de captar informaciones sobre lo que ocurría en España. Para la primavera de 1936 se conservan los informes que un inspector de policía francés y sus servicios recogían de entre los medios de la emigración con, en general, noticias, chismorreos e informaciones más que dudosas.

Fue la embajada en la capital francesa la que transmitió mayor número de informaciones sobre manejos monárquicos y no monárquicos. Tenemos la impresión de que también centralizaba lo que captaban otros consulados españoles en Francia. Su papel fue fundamental, como correspondía a la representación oficial del Estado. El 12 de diciembre de 1932, el director general de Seguridad francés invitó al encargado de Negocios, José María Aguinaga, ³⁹ a que fuera a verle. Había recibido algunas noticias recogidas por sus propios servicios respecto a la actuación de algunos elementos españoles en el país. A tal efecto le leyó un informe bastante completo relativo a las actividades libertarias en Marsella, Burdeos, Arlés y Narbona. Precisó que lo hacía a título estrictamente confidencial y rogó que, cuando en España se procediera a las oportunas investigaciones, no expresara el origen de las noticias que había proporcionado. Como es lógico, el alto funcionario francés se cubría las espaldas sabiendo pertinentemente que Aguinaga no podría hacerle caso.

Uno de los párrafos del informe merece ser transcrito tal cual. A él nos referiremos en uno de los capítulos finales de este libro cuando abordemos una referencia al movimiento anarquista.

Dichos elementos se movían en el sentido de provocar agitaciones (...) que o habrían de coincidir con movimientos provocados por elementos monárquicos o ser determinados por propios elementos sindicalistas sin esperar a ese género de coincidencias. Monsieur Thomé estimaba podía ser útil no desdeñar la actuación de dichos elementos [...] Volvió a ofrecerse a colaborar

los servicios de Prensa e Información del Ministerio de Estado. Se pasó a los sublevados. Terminó su carrera de embajador en Jordania. Escribió un lamentable libro sobre la diplomacia mundial ante la guerra civil.

^{39.} Estaba destinado en París desde antes de la República. Fue defendido vigorosamente por el embajador Salvador de Madariaga cuando se discutió en Cortes el proyecto de ley de depuración de la Carrera Diplomática en el verano de 1932. Llegó a subsecretario. Separado del servicio por los sublevados y reingresado en 1947. Pérez Ruiz, pp. 51 y 176.

con el que suscribe en el sentido de comunicación recíproca de cuantas noticias o referencias nos llegaran [...] reiterando sus buenos deseos y los del Gobierno de la República francesa en el particular.

Pocas semanas después se produjeron algunos motines anarquistas en Cataluña. Cabría pensar que fuera a tal posibilidad a la que se refiriera Thomé, v si alguien levó el despacho con atención, bien fuese en Gobernación o Estado, probablemente extrajera conclusiones de tal tenor. Además, Thomé advirtió de que había llegado a sus oídos que se preparaba un atentado contra Azaña, en el que estaría implicado un tal Ramón Sales, uno de los fundadores de los denominados Sindicatos Libres, furiosamente antianarquistas, y entonces exiliado en Francia. Sales, de adscripción tradicionalista (jaimista), protegido de Severiano Martínez Anido, ministro de Gobernación con Primo de Rivera y de nuevo con Franco como ministro de Orden Público, caería más tarde en la órbita de Calvo Sotelo. Por el contrario, el director general francés redujo la agitación monárquica tras el regreso a España de Antonio Goicoechea y el conde de Vallellano, y afirmó que el general Barrera parecía haberse calmado. Aguinaga lo atribuyó a las gestiones realizadas por Madariaga⁴⁰ cerca del presidente del Consejo y ministro de Exteriores, Édouard Herriot, y con el propio director general de Seguridad.

Incluso el propio embajador no tuvo el menor inconveniente en transmitir el 14 de noviembre de 1932 dos informes que le había elevado el agente de policía incrustado en la embajada. Uno de ellos se hacía eco de presiones de Alfonso XIII por desencadenar un movimiento promonárquico que borrase el fracaso del 10 de agosto. En algunos círculos españoles de París se consideraba que subsistían concomitancias entre los elementos monárquicos y los anarcosindicalistas (también se añadía a los comunistas), pero que cada uno esperaba engañar a sus aliados circunstanciales. Mata recordó que en las guarniciones de toda España existían oficiales monárquicos y comprometidos en secundar el movimiento, que los terratenientes y exgrandes de España estaban dispuesto a dar una batalla a la desesperada para evitar el despojo de sus fincas tras la futura ley de reforma agraria y que aportaban grandes sumas de dinero al general Barrera. Estos extremos no carecían de fundamento.

^{40.} Debemos hacer constar que tan eminente y polifacético historiador y diplomático parece que tuvo mala memoria. Las referencias a la conspiración monárquica en su autobiografía son escasísimas. Arremetió contra la presencia policial en la embajada y la presentó de forma totalmente distorsionada. ¡Vaya pájaro!